

# BOLETIN OFICIAL

## DE LA REPUBLICA ARGENTINA

BUENOS AIRES, VIERNES 26 DE JUNIO DE 1992

AÑO C

\$ 0,20

Nº 27.417

1ª LEGISLACION  
Y AVISOS OFICIALES

Los documentos que aparecen en el BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA serán tenidos por auténticos y obligatorios por el efecto de esta publicación y por comunicados y suficientemente circulados dentro de todo el territorio nacional (Decreto Nº 659/1947)

### MINISTERIO DE JUSTICIA

DR. LEON C. ARSLANIAN  
MINISTRO

### SECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

DR. JOSE A. PRADELL  
SECRETARIO

### DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL

DR. RUBEN A. SOSA  
DIRECTOR NACIONAL

DIRECCION NACIONAL Tel. 322- 3982

DEPTO. EDITORIAL Tel. 322-4009

INFORMES LEGISLATIVOS  
Tel. 322-3788

SUSCRIPCIONES Tel. 322-4056

Domicilio legal: Suipacha 767  
1008 - Capital Federal

Registro Nacional  
de la Propiedad Intelectual  
Nº 246.760

y cargas. Quedan comprendidas dentro del régimen de esta ley las plataformas fijas o flotantes para alijo o completamiento de cargas.

**ARTICULO 3º** — Quedan excluidos del régimen previsto en la presente ley, los puertos o sectores de éstos, destinados exclusivamente para el uso militar o el ejercicio del poder de policía estatal.

#### TITULO II

#### DE LA HABILITACION

#### CAPITULO I

#### DE LOS PUERTOS EXISTENTES O A CREARSE

**ARTICULO 4º** — Requieren habilitación del Estado nacional todos los puertos comerciales o industriales que involucren al comercio internacional o interprovincial.

**ARTICULO 5º** — La habilitación de todos los puertos referidos en el artículo 4º debe ser otorgada por el Poder Ejecutivo, según lo establecido en esta ley, comunicando dicha decisión al Congreso dentro del plazo de diez días hábiles, contados a partir de la fecha del decreto respectivo.

**ARTICULO 6º** — A los efectos de la habilitación, la autoridad competente deberá tener en cuenta las siguientes pautas:

- Ubicación del puerto;
- Identificación de las instalaciones portuarias;
- Individualización de las personas físicas o jurídicas, titulares de los puertos;
- Clasificación de los puertos, según la titularidad del inmueble donde se encuentren ubicados, según su uso y según su destino; categorización que serán definidas por el titular del puerto;
- Aspectos vinculados con la defensa y seguridad nacional;
- Incidencia en el medio ambiente, niveles máximos de efluentes gaseosos, sólidos y líquidos;
- Afectación del puerto al comercio interprovincial y/o internacional;
- Normas de higiene y seguridad laboral;
- Control aduanero y de migraciones;
- Policía de la navegación y seguridad portuaria.

**ARTICULO 7º** — Los puertos se clasificarán en:

- Según la titularidad del inmueble:  
Nacionales  
Provinciales  
Municipales  
De los particulares

- Según su uso:  
Uso público  
Uso privado

Son considerados puertos de uso público: aquellos que, por su ubicación y características de la operatoria deban prestar obligatoriamente el servicio a todo usuario que lo requiera.

Son considerados puertos de uso privado: aquellos que, ofrezcan y presten servicios a buques, armadores, cargadores y recibidores de mercaderías, en forma restringida a las propias necesidades de sus titulares o las de terceros vinculados contractualmente con ellos. Dicha actividad se desarrollará dentro del sistema de libre competencia, tanto en materia de precios como de admisión de usuarios.

3) Según su destino, e independientemente de la titularidad del dominio del inmueble y de su uso:

- Comerciales
- Industriales
- Recreativos en general

Se consideran puertos comerciales, aquellos cuyos destinos es la prestación de servicios a buques y cargas, cobrando un precio por tales servicios.

Son considerados puertos industriales, aquellos en los que se opere exclusivamente con las cargas específicas de un proceso industrial, extractivo o de captura debiendo existir una

integración operativa entre la actividad principal de la industria y el puerto.

Son considerados puertos recreativos en general, los deportivos, científicos o turísticos locales.

**ARTICULO 8º** — El destino de los puertos podrá ser modificado con autorización previa y expresa de la Autoridad de Aplicación. No se considerará cambio de destino la modificación de las instalaciones que resulte de los avances tecnológicos en el proceso industrial, de las exigencias del mercado y de las materias primas o productos elaborados que se embarquen o desembarquen en dichos puertos.

#### CAPITULO II

#### DE LOS PUERTOS EN FUNCIONAMIENTO

**ARTICULO 9º** — Los puertos y terminales particulares que a la fecha de promulgación de esta Ley se encuentren en funcionamiento con autorización precaria otorgada por autoridad

## SUMARIO

### ACTIVIDADES PORTUARIAS

Ley Nº 24.093

**Ámbito de aplicación. Habilitación. Administración y operatoria portuaria. Jurisdicción y control. Autoridad de aplicación. Reglamentación. Consideraciones finales.**

Sanccionada: junio 3 de 1992  
Promulgada Parcialmente: junio 24 de 1992

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

#### TITULO I

#### AMBITO DE APLICACION

**ARTICULO 1º** — Todos los aspectos vinculados a la habilitación, administración y operación de los puertos estatales y particulares existentes o a crearse en el territorio de la República, se rigen por la presente ley.

**ARTICULO 2º** — Denominanse puertos a los ámbitos acuáticos y terrestres naturales o artificiales e instalaciones fijas aptos para las maniobras de fondeo, atraque y desatraque y permanencia en buques o artefactos navales para efectuar operaciones de transferencia de cargas entre los modos de transportes acuático y terrestre o embarque y desembarque de pasajeros, y demás servicios que puedan ser prestados a los buques o artefactos navales, pasajeros

Pág.		Pág.
	<b>ACTIVIDADES PORTUARIAS</b> Ley Nº 24.093 Ámbito de aplicación. Habilitación. Administración y operatoria portuaria. Jurisdicción y control. Autoridad de aplicación. Reglamentación. Consideraciones finales.	3
1	<b>ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS</b> Resolución 967/92-ANA Modificación del listado de Aduanas autorizadas para el libramiento a plaza de importaciones de mercaderías del Ramo Productos Químicos.	3
14	<b>ENERGIA ELECTRICA</b> Resolución 70/92-SEE Apruébase el Reglamento Operativo del Programa de Energía Eléctrica Provincial.	4
11	<b>HIDROCARBUROS</b> Resolución 61/92-SHM Otórgase autorización para la exportación de gas producido en la Cuenca Neuquina con destino a la República de Chile.	9
10	<b>IMPUESTOS</b> Decreto 986/92 Déjase sin efecto la aplicación de un gravamen establecido sobre productos de origen importado.	22
3	<b>MIGRACIONES</b> Decreto 1013/92 Modificación del Reglamento de Migraciones aprobado por el Decreto Nº 1434/87.	23
3	Decreto 1033/92 Normas de excepción para extranjeros nativos de países limítrofes.	15
	<b>AMBITO DE APLICACION</b>	23
	<b>CONCURSOS OFICIALES</b>	
	Anteriores	
	<b>REMATES OFICIALES</b>	
	Anteriores	
	<b>AVISOS OFICIALES</b>	
	Nuevos	
	Anteriores	

competente y conforme a las normas que regulaban la materia, serán definitivamente habilitados por el Poder Ejecutivo Nacional, quien deberá comunicar esta decisión al Congreso Nacional, dentro del plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de la resolución.

## CAPITULO III

## CONSIDERACIONES GENERALES

**ARTICULO 10.** — La habilitación de todos los puertos mantendrá su vigencia mientras continúe la actividad de los mismos y el mantenimiento de las condiciones técnicas y operativas exigidas por la presente ley y su reglamentación y que dieron lugar a la habilitación respectiva.

## TITULO III

## DE LA ADMINISTRACION Y OPERATORIA PORTUARIA

## CAPITULO I

DE LA TRANSFERENCIA DEL DOMINIO, ADMINISTRACION O EXPLOTACION PORTUARIA NACIONAL A LOS ESTADOS PROVINCIALES Y/O A LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y/O A LA ACTIVIDAD PRIVADA

**ARTICULO 11.** — A solicitud de las provincias y/o de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en cuyos territorios se sitúen puertos de propiedad y/o administrados por el Estado nacional, y mediante el procedimiento que al respecto determine la reglamentación, el Poder Ejecutivo les transferirá a título gratuito, el dominio y/o administración portuaria.

En caso que las jurisdicciones indicadas en el párrafo anterior no demostrasen interés por la mencionada transferencia del dominio o administración de esos puertos, el Poder Ejecutivo podrá mantenerlos bajo la órbita del Estado nacional, transferirlos a la actividad privada o bien desafectarlos.

## CAPITULO II

## DE LA ADMINISTRACION Y OPERATORIA ESTATAL

**ARTICULO 12.** — En el caso especial de los puertos de Buenos Aires, Rosario, Bahía Blanca, Quequén y Santa Fe, la transferencia prevista en el artículo anterior se efectuará a condición de que, previamente, se hayan constituido sociedades de derecho privado o entes públicos no estatales que tendrán a su cargo la administración de cada uno de esos puertos. Estos entes se organizarán asegurando la participación de los sectores particulares interesados en el quehacer portuario, comprendiendo a los operadores, prestadores de servicios, productores usuarios, trabajadores y demás vinculados a la actividad. Las provincias en cuyo territorio se encuentre emplazado el puerto y el o los municipios en cuyo o cuyos ejidos se halle situado el puerto también tendrán participación en los entes, de acuerdo a la modalidad que establezca el estatuto respectivo de cada puerto. Las personas jurídicas que administren y exploten los puertos mencionados tendrán la facultad de determinar el propio tarifario de servicios, debiendo invertir en el mismo puerto el producto de su explotación, conforme lo establezca el estatuto respectivo.

**ARTICULO 13.** — La administración de los puertos nacionales podrá operar y explotar a estos por sí, o bien ceder la operatoria y explotación a personas jurídicas estatales, mixtas o privadas, a través de contratos de concesión de uso o locación total o parcial, mediante el procedimiento de licitación pública y conforme a las disposiciones de la presente ley.

**ARTICULO 14.** — La administración de los puertos nacionales, podrá celebrar acuerdos con personas físicas o de existencia ideal, a fin de reparar, modificar, ampliar, o reducir las instalaciones existentes o construir nuevas, para la prestación de servicios portuarios, mediante la adopción de cualquier alternativa de procedimiento que determine la autoridad de aplicación, conforme la legislación vigente.

**ARTICULO 15.** — En caso de licitación de obras públicas para la construcción o reparación de puertos e instalaciones, muelles, elevadores, terminales de contenedores y toda otra instalación principal o accesoria, la administración comitente podrá celebrar acuerdo de anti-

**ARTICULO 16.** — Los plazos de cualquiera de los contratos mencionados en los artículos anteriores, deberán permitir la amortización racional de las inversiones acordadas entre las partes.

## CAPITULO III

## DE LA ADMINISTRACION Y OPERATORIA DE LOS PUERTOS PARTICULARES

**ARTICULO 17.** — Los particulares podrán construir, administrar y operar puertos de uso público o de uso privado, con destino comercial, industrial o recreativo, en terrenos fiscales o de su propiedad.

**ARTICULO 18.** — Los buques y las cargas que operen en los puertos de los particulares estarán exentos del pago al Estado de derechos y tasas por servicios portuarios que éste no preste efectivamente.

**ARTICULO 19.** — La reglamentación establecerá los servicios mínimos y esenciales que deberán prestarse a los buques y a las cargas en los puertos de uso público comerciales, y las instalaciones que deberán facilitarse a las autoridades policiales y de control, tanto en los puertos de uso público como de uso privado y cualquiera sea su destino.

## CAPITULO IV

## CONSIDERACIONES GENERALES

**ARTICULO 20.** — El responsable de cada puerto, cualquiera sea su titular y clasificación de éste, tendrá a su cargo: el mantenimiento y mejora de las obras y servicios esenciales, tales como profundidades y señalización de los accesos y espejos de agua, instalaciones de amarre seguro, remolque y practicafe. La referida responsabilidad deberá ejercerse en un todo de acuerdo a las normas vigentes emitidas en función del poder de policía que ejerce el Estado Nacional en estas materias. La Prefectura Naval Argentina será la autoridad competente para expedir las licencias habilitantes para ejercer el practicafe.

## TITULO IV

## DE LA JURISDICCION Y CONTROL

**ARTICULO 21.** — Todos los puertos comprendidos en la presente ley están sometidos a los controles de las autoridades nacionales competentes, conforme a las leyes respectivas, incluida entre otros la legislación laboral, de negociación colectiva y las normas referentes a la navegación y el transporte por agua, y sin perjuicio de las competencias constitucionales locales. Las autoridades de aplicación deben coordinar tales controles ejercidos en razón de las responsabilidades inherentes a los organismos nacionales al solo efecto de que no interfieran con las operaciones portuarias.

## TITULO V

## DE LA AUTORIDAD DE APLICACION

**ARTICULO 22.** — La autoridad de aplicación de la presente ley, será la que determine el Poder Ejecutivo en el ámbito del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación, o en el que en el futuro absorba su competencia, y tendrá las siguientes funciones y atribuciones, sin que esta enunciación pueda considerarse taxativa:

a) Asesorar al Poder Ejecutivo Nacional en la habilitación de los puertos conforme a los artículos 5º y 9º de la presente ley;

b) Controlar dentro del ámbito de las actividad portuaria el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley y de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten en el orden competencia nacional;

c) Controlar que los titulares de las habilitaciones portuarias otorgadas, den cumplimiento a los proyectos constructivos y operativos que justificaron su solicitud, y den a los puertos e instalaciones portuarias la finalidad que condicionó la habilitación. Podrá suspender dichas habilitaciones hasta que sean restablecidas las condiciones exigidas o cancelarla definitivamente, cuando circunstancias objetivas y debidamente probadas, acrediten la imposibilidad de su restablecimiento;

d) Promover y hacer efectiva la modernización, eficacia y economía de cada uno de los puertos del Estado Nacional;

e) Estimular y facilitar la inversión privada en la explotación y administración de los puertos;

f) A su requerimiento, dar asesoramiento técnico y jurídico a las provincias y/o municipios que promuevan las instalaciones de puertos en sus respectivos territorios;

g) Proponer al Poder Ejecutivo nacional las políticas generales en materia portuaria y de vías navegables;

h) Establecer acuerdos delimitando las responsabilidades en el dragado de accesos y dársenas de cada puerto, en el caso que ello fuera necesario en zonas donde la responsabilidad sea de dudosa o conflictiva determinación;

i) Controlar, subsidiariamente, en el ámbito portuario el cumplimiento de cualquier ley o reglamentación cuya aplicación competa a una autoridad nacional;

j) Coordinar la acción de los distintos organismos de supervisión y control del Estado nacional que actúan dentro del ámbito portuario, con el fin de evitar la superposición de funciones, y facilitar el funcionamiento eficiente del puerto en sí mismo y de los servicios que en él se prestan; todo ello, sin perjuicio de las leyes y reglamentos vigentes en la materia;

k) Aplicar las sanciones que correspondan por la comisión de las infracciones previstas en el artículo 23 inciso a) de la presente ley;

l) Fijar el plazo de amortización de las inversiones a los efectos de lo dispuesto en el artículo 16 de esta ley, para el caso de los puertos propiedad del Estado nacional;

ll) Fijar la alternativa de procedimiento para celebrar acuerdos con personas físicas o de existencia ideal a los fines de lo dispuesto en el artículo 14 de esta ley para el caso de los puertos propiedad del Estado nacional.

## TITULO VI

## DE LA REGLAMENTACION

**ARTICULO 23.** — El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley en un período de ciento ochenta días a partir de su promulgación:

Entre otros aspectos la reglamentación contendrá:

a) El régimen disciplinario al que se someterán los incumplimientos de las disposiciones legales o reglamentarias en que incurrieren los titulares de las administraciones portuarias. Las sanciones podrán ser: suspensión de la habilitación por tiempo determinado y caducidad de la habilitación; quedando abierta en todos los casos la vía recursiva ante la autoridad que corresponda en el ámbito administrativo así como ante la justicia competente;

b) La obligatoriedad de llevar en todos los puertos registros contables y de las operaciones realizadas, que permitan un fácil acceso a la información necesaria para el ejercicio de las competencias de la autoridad de aplicación;

c) Las condiciones que deben reunir los peticionantes de las habilitaciones o concesiones de uso, explotación y/o administración de los puertos;

d) La enumeración de los servicios mínimos y esenciales y las instalaciones que deberán facilitarse a las autoridades policiales y de control en los puertos conforme al artículo 19 de la ley;

e) Pautas referidas a los criterios de higiene y seguridad laboral, incidencia ambiental, controles sanitarios.

## TITULO VII

## CONSIDERACIONES FINALES

**ARTICULO 24.** — Deróganse las leyes 16.971, 16.972, 21.892, 22.080, el decreto 10.059/43 ratificado por ley 13.895 y toda otra norma legal o reglamentaria en cuanto se oponga a la presente. Derógase el Anexo I de la ley 23.696 en cuanto dice: "Administración General de Puertos descentralización y provincialización. Concesión total o parcial de puertos o instalaciones portuarias."

**ARTICULO 25.** — Comuníquese al Poder Ejecutivo. —ALBERTO R. PIERRI. —EDUARDO

MENEM. — Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo. — Edgardo Piuze.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS TRES DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS

## Decreto 1029/92

Bs. As., 24/6/92

VISTO el proyecto de Ley registrado bajo el N° 24.093 y;

## CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 23.696 declaraba sujeta a privatización a la ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS disponiendo su descentralización y provincialización y a su vez la concesión total o parcial de puertos o instalaciones portuarias principales o accesorias.

Que en uso de las atribuciones que confiere el Artículo 61 de la mencionada norma legal el PODER EJECUTIVO NACIONAL dispuso la liquidación de la ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO, la que se efectivizará una vez que los puertos que se encuentran bajo su jurisdicción sean transformados, transferidos o privatizados, según lo estatuye el Decreto N° 817 del 28 de mayo de 1992.

Que en el proyecto de ley que se observa se dispone la transferencia del Puerto de Buenos Aires a la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.

Que ello sea dispuesto en una norma legal y sin posibilidad de elección para el PODER EJECUTIVO NACIONAL es inconveniente dado que es necesario, dentro de las prescripciones de la Ley N° 23.696, que la autoridad de aplicación conserve su poder de decisión a efectos de disponer la transferencia o privatización del Puerto de Buenos Aires de la manera más propicia según los fines perseguidos en esa ley.

Que asimismo, es de destacar que la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES es un ente descentralizado que actúa dentro de la esfera del Gobierno Federal, y por lo tanto resulta conveniente que la privatización del puerto mencionado sea ejecutada por la máxima autoridad de éste, que no es otro que el PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Que conforme lo que surge de los considerandos anteriores es inconveniente la derogación del Anexo I de la Ley N° 23.696 en lo que se refiere a los puertos de la Nación, toda vez que permite al PODER EJECUTIVO NACIONAL la determinación de descentralización o provincialización de los mismos y su concesión total o parcial.

Que en tal sentido es necesario afirmar que suprimiendo la parte del Anexo detallada se estaría privando a la autoridad de aplicación de utilizar los procedimientos de la Ley N° 23.696 que tienen como característica principal privilegiar la transparencia y la igualdad entre los posibles concesionarios.

Que lo dicho no constituye un mero aspecto formal dado que en la legislación nacional no existe norma que reglamente los procedimientos previos a la concesión, llegando a sostener calificada doctrina e inclusive la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION que en tales contratos debe estarse a la libre elección, de no utilizarse los sistemas previstos en la Ley N° 23.696.

Que el presente se dicta en uso de las atribuciones que confiere el artículo 72 de la Constitución Nacional.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA DECRETA:

**Artículo 1º** — Obsérvese la parte del artículo 11 del proyecto de ley registrado bajo el N° 24.093 que menciona a la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.

**Art. 2º** — Obsérvese la parte del artículo 24 del proyecto de ley registrado bajo el N° 24.093 que dispone la derogación del Anexo I de la Ley N° 23.696 en cuanto dice: "ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS, descentralización y provincialización. Concesión total o parcial de puertos o instalaciones portuarias".

**Art. 3º** — Con las salvedades establecidas en los artículos precedentes, cúmplase, promulga-



se y téngase por ley de la Nación el proyecto de ley registrado bajo el N° 24.093.

**Art. 4°** — Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — MENEM. — Guido Di Tella.



## DECRETOS

### IMPUESTOS

#### Decreto 986/92

**Déjase sin efecto la aplicación de un gravamen establecido sobre productos de origen importado.**

Bs. As., 18/6/92

VISTO el Expediente N° 604.653/92 del Registro de la SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, lo dispuesto en el Artículo 80 de la Ley de Impuestos Internos, texto ordenado en 1979 y sus modificaciones, el Decreto N° 611 de fecha 10 de abril de 1991 y el Decreto N° 365 de fecha 28 de febrero de 1992, y

#### CONSIDERANDO:

Que la suspensión transitoria de la carga fiscal específica establecida por los Decretos citados en el VISTO para el sector de electrodomésticos, requiere de un tratamiento uniforme tanto para los bienes de fabricación nacional como para los de origen importado.

Que la medida que se propicia tiende a la búsqueda de una mayor competitividad y eficiencia de los mercados del sector comprendido en la presente norma.

Que el Servicio Jurídico permanente ha tomado la intervención que le compete.

Que el presente acto se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 86 de la Ley de Impuestos Internos, texto ordenado en 1979 y sus modificatorios.

Por ello,

EL PRESIDENTE  
DE LA NACION ARGENTINA  
DECRETA:

**Artículo 1°** — Déjase sin efecto la aplicación del gravamen establecido sobre los productos de origen importado detallados en las partidas de la Planilla II - Anexa al inciso b) del Artículo 70 de la Ley de Impuestos Internos, texto ordenado en 1979 y sus modificaciones, que se indican a continuación:

Partida N.C.C.A. 84.19 La totalidad de la partida.  
Partida N.C.C.A. 85.06 La totalidad de la partida.  
Partida N.C.C.A. 85.07 La totalidad de la partida.  
Partida N.C.C.A. 85.12 La totalidad de la partida.

**Art. 2°** — A los efectos de la aplicación del Artículo anterior, deberá tenerse en cuenta la siguiente correlación, en virtud de la nomenclatura vigente basada en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías establecida por el Decreto N° 2657 de fecha 19 de diciembre de 1991:

PARTIDA N.C.C.A.	PARTIDA S.A.
84.19	8422
85.06	8509
85.07	8510
85.12	8516

**Art. 3°** — Lo dispuesto en el Artículo 1° del presente decreto, registrará para los hechos impositivos que se produzcan desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial y hasta el 31 de diciembre de 1992, ambas fechas inclusive.

**Art. 4°** — Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — MENEM. — Domingo F. Cavallo.

### MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

#### Decreto 1000/92

**Designase Subsecretario de Industria.**

Bs. As., 18/6/92

VISTO el Artículo 86°, Inciso 10° de la Constitución Nacional.

EL PRESIDENTE  
DE LA NACION ARGENTINA  
DECRETA:

**Artículo 1°** — Designase en la SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, al Licenciado Don Carlos Alfredo MAGARIÑOS (D.N.I. N° 16.071.846) en el cargo de SUBSECRETARIO DE INDUSTRIA.

**Art. 2°** — Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — MENEM. — Domingo F. Cavallo.

### MIGRACIONES

#### Decreto 1013/92

**Modificación del Reglamento de Migraciones aprobado por el Decreto N° 1434/87.**

Bs. As., 23/6/92

VISTO el Reglamento de Migraciones aprobado por el Decreto N° 1434/87, y

#### CONSIDERANDO:

Que en el mismo se establecen distintos requisitos para la obtención de la radicación definitiva en la República.

Que ante las nuevas modalidades adoptadas por la delincuencia internacional, se hace necesario extremar los recaudos de control en el otorgamiento de tales radificaciones.

Que a tal efecto resulta conveniente requerir de organismos internacionales relacionados con temas de seguridad, los antecedentes policiales y judiciales de los extranjeros que soliciten su radicación permanente, como condición previa a tal beneficio.

Que dicha medida no implica en modo alguno establecer una política más restrictiva en materia de admisión de los extranjeros, ni una sobrecarga en los trámites que los mismos, deben realizar, sino que sólo apunta a consolidar los mecanismos de control ya existentes.

Que el presente decreto se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 86, inciso 2 de la Constitución Nacional y de los artículos 3° y 12 de la Ley N° 22.439.

Por ello,

EL PRESIDENTE  
DE LA NACION ARGENTINA  
DECRETA:

**Artículo 1°** — Incorpórase como artículo 44 bis del Reglamento de Migraciones aprobado por Decreto N° 1434/87, el siguiente:

"Artículo 44 (bis):

La Dirección Nacional de Población y Migración, previo al otorgamiento de la radicación definitiva, deberá tener a la vista la información acerca de los antecedentes internacionales policiales y judiciales del peticionante.

Hasta tanto se evalúe tal información, la Dirección Nacional de Población y Migración otorgará al extranjero una radicación temporaria por el término máximo de DOS (2) años.

Una vez cumplimentado tal extremo, y no hallándose el solicitante comprendido en alguna de las inhabilidades absolutas previstas en el Reglamento de Migración, el organismo de aplicación convertirá en forma automática la radicación temporaria en permanente".

**Art. 2°** — Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — MENEM. — José L. Manzano.

### MIGRACIONES

#### Decreto 1033/92

**Normas de excepción para extranjeros nativos de países limítrofes. Ambito de aplicación. Requisitos y plazos. Tramitación. Adecuación normativa. Disposiciones complementarias.**

Bs. As., 24/6/92

VISTO la Ley N° 22.439, los Decretos N° 1434/87, y N° 1013/92, y la situación migratoria irregular en la que se hallan una gran cantidad de extranjeros nativos de países limítrofes residentes en el territorio nacional, y

#### CONSIDERANDO:

Que tales personas, aún sin la documentación legal necesaria, en su mayoría desarrollan actividades útiles para el país.

Que por las implicancias sociales y económicas que tiene para las personas y familias que residen en tal condición, es necesario adoptar medidas tendientes a normalizar esa situación.

Que esta circunstancia conlleva también la necesidad de dar una adecuada solución al innegable perjuicio que ocasiona al fisco nacional, el hecho de que tanto los empleadores como los extranjeros, puedan evadir todo tipo de contribución y aporte obligatorio que deba efectuarse en razón de su relación de empleo en el país.

Que la mayoría de dichas personas no pueden satisfacer los requisitos usuales para radicarse legalmente en el país, no obstante su efectiva vinculación al mismo, hallándose además imposibilitados para obtener documentos de identidad.

Que se hace necesario instaurar una medida generosa de carácter excepcional, que, coincidiendo con la orientación general del gobierno, permita dar solución a las situaciones planteadas, en el marco de la regulación vigente.

Que la normativa de excepción que se establece por el presente, se encuadra en una reformulación de objetivos de la política de población y en particular de la migratoria vigente, que plantea la necesidad de derogar las previsiones contenidas en el Decreto N° 3938/77, atento la importancia y significación que adquiere esta problemática en relación con el desarrollo de nuestro país.

Que para alcanzar los nuevos objetivos que se persiguen en materia de población y migraciones, procede fijar políticas que contemplen la diversidad de situaciones que caracterizan a estos fenómenos, y que resulten compatibles con el actual período democrático, los principios y derechos que consagra la Constitución Nacional, y el contenido de los instrumentos internacionales ratificados por nuestro país.

Que teniendo en cuenta los altos principios de hermandad e integración latinoamericana, que persigue como objetivo prioritario el Gobierno Nacional en la etapa actual, y las características de la política migratoria establecida en el Decreto N° 1434/87 se considera necesario suspender los criterios migratorios hoy vigentes, para los nativos de estos países limítrofes y facilitar su radicación legal en nuestro territorio.

Que la adopción de esta medida consolidará, además, un marco propicio para el desarrollo de actividades conjuntas con los países limítrofes en materia de integración migratoria y poblacional, actividades a ser conducidas por el Ministerio del Interior.

Que en virtud de los procedimientos implementados a partir del Acuerdo Binacional Argentino-Uruguayo, corresponde prever, para los ciudadanos nativos de la República Oriental del Uruguay, una documentación alternativa para la acreditación de su residencia en el Territorio Nacional.

Que la presente medida encuadra en las facultades emergentes del artículo 86, incisos 1) y 2) de la CONSTITUCION NACIONAL, y de los artículos 2°, 3° y 12 de la Ley 22.439.

Por ello,

EL PRESIDENTE  
DE LA NACION ARGENTINA  
DECRETA:

#### CAPITULO 1. — AMBITO DE APLICACION.

**Artículo 1°** — Personas comprendidas. Los ciudadanos nativos de países limítrofes que se encuentren establecidos de hecho en el territorio de la República al 31 de diciembre de 1991, pueden obtener su radicación definitiva, de acuerdo con las disposiciones del presente decreto, con las excepciones previstas en el artículo siguiente.

**Art. 2°** — Excepción. No podrán acogerse a los beneficios de la regularización migratoria aquellos extranjeros que se encuentren comprendidos dentro de alguna de las siguientes calificaciones migratorias:

a) Residentes Transitorios ingresados para someterse a tratamiento médico (Capítulo II, Artículo 30 inciso "C" del Reglamento de Migración).

b) Extranjeros ingresados en virtud de Visación Diplomática, Oficial o de Cortesía (Sección II, Artículo 38 del Reglamento de Migración).

c) Asilados Políticos (Título XII, del Reglamento de Migración).

d) Aquellos que estén incluidos en alguna de las inhabilidades absolutas previstas en el Reglamento de Migración.

#### CAPITULO 2. — REQUISITOS Y PLAZOS.

**Art. 3°** — Plazo. El plazo para acogerse a los beneficios del presente decreto será desde el 2 de noviembre del corriente año y hasta el 30 de abril de 1993.

**Art. 4°** — Requisitos. Los requisitos a cumplir para la realización del trámite de regularización migratoria, son:

a) Presentar la solicitud de regularización migratoria.

b) Acreditar identidad, con cualquiera de los documentos o certificaciones que se mencionan a continuación:

I. — Pasaporte.

II. — Cédula de Identidad o documento similar de su país de origen.

III. — Libreta de enrolamiento o cívica o documento similar de su país de origen.

IV. — Certificado de nacionalidad o similar con fotografía, expedido por autoridad consular del país del extranjero en la REPUBLICA ARGENTINA, legalizado por el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO.

V. — Documento Nacional de Identidad en el supuesto de que el extranjero hubiese obtenido residencia temporaria.

c) Acreditar la residencia establecida en el artículo 1°, con cualquiera de los instrumentos que se mencionan:

I. — Sello de entrada estampado en el pasaporte o en la tarjeta de control o en la tarjeta de entrada y salida. En el caso de los nacionales de la REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY podrán hacerlo con la certificación de ingreso que en su momento hubiera extendido la DIRECCION NACIONAL DE POBLACION Y MIGRACION.

II. — Documento Nacional de Identidad en el supuesto de que el extranjero hubiera obtenido residencia temporaria.

III. — Cualquier documento extendido por autoridad nacional, provincial o municipal, pudiendo ser: certificado de estudios, boletín de calificaciones, certificado de matrimonio celebrado en el país, certificado de instituciones hospitalarias, certificado de nacimiento de hijo argentino, certificado policial, información sumaria judicial o policial, u otros elementos que quedará a criterio de la autoridad de aplicación aceptar como válidos.

d) Presentar declaración jurada, de que no se encuentra inhabilitado para acogerse a los beneficios contemplados en este decreto.

e) Acreditar aptitud psicofísica, mediante certificado médico expedido por autoridad